

Escrito de contestación a la demanda de divorcio

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 de Jerez de la Fra.

Don Álvaro García Vázquez, Procurador de los tribunales con número de colegiado 1701, en nombre y representación de Doña María Teresa Mancha Cortes, con domicilio en esta ciudad, n.º10, calle Corredera, lo que acredito mediante escritura de poder para pleitos, cuya devolución desde ahora dejo interesada previo testimonio en autos, con la asistencia de los Letrados Doña Marta García Villaverde, Doña Raquel Moya Quintero y Don Francisco José García López, como más procedente sea en derecho ante el juzgado comparezco en autos de disolución matrimonial por divorcio n.º 371 / 2013, seguidos ante ese Juzgado a instancia de María Teresa Mancha Cortes, y **DIGO:** Que en cumplimiento del artículo 753 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se me ha dado traslado de la demanda de disolución matrimonial por divorcio interpuesta por Don Antonio Medina Caro, por cuanto en tiempo y forma procedo a contestar dicha demanda, con base en los siguientes hechos y fundamentos:

HECHOS

PRIMERO. Esta parte muestra su conformidad con el correlativo de la demanda.

SEGUNDO: Esta parte muestra su conformidad con el correlativo de la demanda.

TERCERO: Esta parte muestra su conformidad con el correlativo de la demanda.

CUARTO: Esta parte muestra su conformidad con el correlativo de la demanda.

QUINTO: Esta parte muestra su disconformidad con el correlativo de la demanda, tanto en cuanto, nuestra mandante no percibe la cantidad monetaria especificada en la demanda, respecto a la clínica privada propiedad de la misma, debido a la actual situación de crisis económica imperante en España. Presentamos documento anexo nº1 y 2.

SEXTO: Esta parte muestra su disconformidad con el correlativo de la demanda, tanto en cuanto, el hijo mayor quedará bajo la tutela de la madre y esta se encargará de su derecho de alimentos de forma directa.

SÉPTIMO: Esta parte muestra su conformidad con el correlativo de la demanda.

OCTAVO: Esta parte muestra su disconformidad con el correlativo de la demanda, tanto en cuanto, todos estos temas ya han sido rebatidos en la vista previa para la adopción de las medidas provisionales celebrada el día 18 de Noviembre de 2013.

NOVENA: Aun no incluyendo la demanda este hecho creemos de interés incluirlo dado la mención mal ubicada de ciertos sucesos acontecidos: en ningún momento existió por parte de mi mandante abandono familiar, referido en las medidas provisionales y en el suplico.

Ello no obstante, siendo evidente que han transcurrido ampliamente más de tres meses desde la celebración del matrimonio, es claro que ningún sentido tendría que esta parte se opusiera al divorcio que, si bien decidido unilateralmente por la parte hoy actora, también resulta deseable, a la vista de los acontecimientos inmediatos pasados, para mi mandante.

En cualquier caso, y al contrario de lo manifestado en la demanda, mi mandante ha cumplido siempre sus obligaciones familiares y conyugales, habiendo dedicado la totalidad de sus esfuerzos desde la celebración del matrimonio al cuidado de sus hijos, de la vivienda conyugal y, en fin, de su familia, complementando además todas esas actividades con su actividad laboral, llevada a cabo hasta el extremo, teniendo incluso que llevar a cabo dos trabajos (de su misma profesión) para sacar adelante la unidad familiar, debido a que su marido, Don Antonio Medina Caro se encontraba en paro desde hace 4 años.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Jurisdicción y competencia. — Los arts. 21, 22 y 85 de la LOPJ y 36, 46 y 769 de la LEC atribuyen a la jurisdicción española y a. Será competente el juzgado del lugar del domicilio conyugal o, en defecto de éste, y a elección del demandante, el del último domicilio del matrimonio o el de la residencia del demandado.

Según se explica en la LOPJ (arts. 21 y 22) los juzgados y tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles con arreglo a lo establecido en la presente ley y en los tratados y convenios en los que España sea parte.

En el orden civil los juzgados y tribunales españoles serán competentes:

- Con carácter exclusivo en materia de derechos reales y de arrendamientos de inmuebles que se hallen en España y de las personas jurídicas (Antonio y M^a Teresa que tengan su domicilio en territorio español) así respecto a los acuerdos y decisiones de los órganos en materia de validez de las inscripciones practicadas (inscripción de matrimonio y de nacimiento) en el Registro español.
- Con carácter general cuando las partes lo hayan sometido expresa o tácitamente a los Juzgados o tribunales españoles, así como cuando el demandado tenga su domicilio en España.

- En defecto de los criterios precedentes y en materia de protección de los bienes de los menores (en este caso Luis y Elena), cuando estos tuviesen su residencia habitual en España, en materia de patrimonio y divorcio (entre Antonio y M^a Teresa) cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante (Antonio Medina Caro) sea español y tenga su residencia habitual en España, así como cuando ambos cónyuges tengan nacionalidad española, cualquiera que sea su lugar de residencia siempre que promuevan su petición en materia de filiación y de relaciones paterno-filiales cuando los hijos (Pedro, Luis y Elena) tengan su residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español (Antonio) o resida habitualmente en España.

- Cuando se trate de adoptar medidas provisionales respecto a personas (en este caso Antonio) o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España. Respecto a las medidas cautelares provisionales citadas anteriormente nos tendremos que referir al artículo 773 LEC:

- El cónyuge que solicite la nulidad de su matrimonio (Antonio), la separación o el divorcio podrá pedir en la demanda lo que considere oportuno sobre las medidas provisionales, siempre que no se hubieren adoptado con anterioridad.

- Admitida la demanda, el tribunal resolverá las peticiones a que se refieren en el apartado anterior y en su defecto acordará lo que proceda dando cumplimiento a todo caso a lo dispuesto en el 103 del código civil.

Admitida la demanda el juez a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente adoptará con audiencia una serie de medidas:

1º- Determinar en interés de los hijos con cuál de los cónyuges (en este caso Antonio) han de quedar sujetos a la patria potestad de ambos y adoptar las disposiciones apropiadas. El secretario judicial convocará a los cónyuges y en su caso al ministerio Fiscal, a una comparecencia que se sustanciará conforme a lo previsto en el 771 Excepcionalmente, los hijos podrán ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así lo consintieren y, de no haberlos, a una institución idónea, confiriéndoseles las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del juez.

Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar (en este caso Antonio) y asimismo, previo inventario, los bienes y objetos del ajuar que continúan en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, así como también las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno.

3ª. Fijar la contribución de cada cónyuge (Antonio y M^a Teresa) a las cargas del matrimonio, incluidas si procede las «litis expensas», establecer las bases para la actualización de cantidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro.

Se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges (Antonio) dedicará a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad.

4.ª Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales que, previo inventario, se hayan de entregar a un cónyuge (Antonio) y las reglas que deban observar en la administración y disposición.

5. ^a Determinar, en su caso, el régimen de administración y disposición de aquellos bienes privativos que por capitulaciones o escritura pública estuvieran especialmente afectados a las cargas del matrimonio.

Conforme al artículo 85 LEC los juzgados de primera instancia conocerán en el orden civil el conocimiento concreto de esta materia.

- En primera instancia de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros juzgados o tribunales.
- Las medidas provisionales quedaran sin efecto cuando sean sustituidas por las que establezca definitivamente la STC o cuando se ponga fin al procedimiento.

Conforme al Artículo 36 se citaran las extensiones y límites del orden jurisdiccional civil:

1. La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte.

En el artículo 46 se explicará la Especialización de algunos Juzgados de Primera Instancia: Los Juzgados de Primera Instancia a los que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se les haya atribuido el conocimiento específico de determinados asuntos, extenderán su competencia, exclusivamente, a los procesos en que se ventilen aquéllos, debiendo inhibirse a favor de los demás tribunales competentes, cuando el proceso verse sobre materias diferentes. Si se planteara cuestión por esta causa, se sustanciará como las cuestiones de competencia.

La competencia determinada será objetiva ya que la persona en este caso (Antonio) acudirá al juzgado de primera instancia y se podrá conocer la razón concreta a la que se refiere en citado caso. Para fundamentarlo tenemos que ajustarnos a su regulación en el artículo 769:

- Salvo que expresamente se disponga otra cosa, será tribunal competente para conocer de los procedimientos a que se refiere este capítulo el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal (Calle Corredera nº10). En el caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante (Antonio) que soliciten la separación o el divorcio de mutuo acuerdo, el del último domicilio del matrimonio.

2. En el procedimiento de divorcio a que se refiere el artículo 777, será competente el Juez del último domicilio común o el del domicilio de cualquiera de los solicitantes.

3. En los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores (Luis y Elena) o sobre alimentos reclamados por un progenitor (Antonio) contra el otro (M^a Teresa) en nombre de los hijos menores, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores. (Calle Corredera nº 10).

4. El tribunal examinará de oficio su competencia. Son nulos los acuerdos de las partes que se opongan a lo dispuesto en este artículo.

II. Tramitación. —Se seguirá el cauce establecido en el art. 770 de la LEC que nos dice que las demandas de separación, divorcio y nulidad se sustanciarán por los trámites del juicio verbal. Por tanto, como estamos en dicho caso, y no se dan ninguna de las excepciones establecidas en la LEC, estamos en dicho supuesto.

Además, dicho procedimiento está sujeto a las siguientes reglas:

1.ª A la demanda deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como los documentos en que el cónyuge funde su derecho. Si se solicitaran medidas de carácter patrimonial, el actor deberá aportar los documentos de que disponga que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges y, en su caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales.

2.ª La reconvencción se propondrá con la contestación a la demanda. El actor dispondrá de 10 días para contestarla.

El demandado, podrá ejercer la reconvencción y solo será admitida, cuando se den dichas causas:

- a)** Cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del matrimonio.
- b)** Cuando el cónyuge demandado de separación o de nulidad pretenda el divorcio.
- c)** Cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación.
- d)** Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio.

A la vista deberán concurrir las partes por sí mismas (deberán de comparecer, tanto Antonio como M^a Teresa), con apercibimiento de que su incomparecencia sin causa justificada podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca para fundamentar sus peticiones sobre medidas definitivas de carácter patrimonial. (Si una de las partes no se presentase, los hechos y medidas alegadas por una, en este caso sería Antonio podrán ser admitidas directamente por el tribunal, ya que la otra parte no se ha presentado).

También será obligatoria la presencia de los abogados respectivo.

(Cada una de las partes, deben de tener representación legal, puesto que se van a debatir cuestiones de interés para ambos y necesitan una tutela efectiva.)

3. Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán dentro del plazo que el Tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días.

(El plazo que señale el tribunal, será el que tengan las partes para presentar y practicar dichas pruebas, pasado dicho plazo, no podrán efectuarlas, puesto que ya ha transcurrido el plazo).

Durante este plazo, el Tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las que se refieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre medidas que afecten a los hijos menores o incapacitados, de acuerdo con la legislación civil aplicable.

Si el procedimiento fuere contencioso y se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuviesen suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años.

(El juez o Tribunal, podrá pedir todo lo que necesite para investigar el caso, es decir, ejercerá su potestad, para pedir todo lo necesario para poder aclarar los hechos y sobre todo, en interés de los menores. Por lo tanto, podrá ser de oficio o a petición del Fiscal, que se realicen las actuaciones pertinentes a tenor de los hijos y sus circunstancias.)

En las exploraciones de menores en los procedimientos civiles se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas y, recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello sea necesario.

(El menor podrá ser oído si el juez así lo estima, en las mejores condiciones para él y siendo buscando siempre la manera más liviana para poder realizar dicho testimonio).

En cualquier momento del proceso, concurriendo los requisitos señalados en el artículo 777, las partes podrán solicitar que continúe el procedimiento por los trámites que se establecen en dicho artículo. (Si se dan los requisitos del Art 777, se llevará a cabo el procedimiento que dicho art establece y con los requisitos que en él se exigen y contemplan. Pero como no estamos en este caso, será tramitado por el art 770, el cual es un procedimiento contencioso, por lo que no se aplica dicha posibilidad).

En los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados en nombre de los hijos menores, para la adopción de las medidas cautelares que sean adecuadas a dichos procesos se seguirán los trámites establecidos en esta Ley para la adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas en los procesos de nulidad, separación o divorcio.

Las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de esta Ley, para someterse a mediación.

(El art 19.4 nos dice que las partes, podrán solicitar la suspensión del proceso, la cual debe ser acordada por el Secretario Judicial por decreto siempre y cuando no se esté perjudicando el interés de uno de los cónyuges o de los hijos y tampoco, mientras no se supere el plazo de sesenta días).

III. Legitimación. — La legitimación se basa en el art 10 LEC en el que dice que las partes legítimas serán los que comparezcan y actúen como titulares de la relación jurídica y el objeto litigioso. En este caso, está relacionado con los art 44 y 86 del CC, donde las partes legítimas son los cónyuges, la parte que va a presentar la demanda que es Antonio, el cual está en el derecho de ella, puesto que así viene recogido en el 86 del CC, y la parte demanda que es M^a Teresa.

Puesto que existen menores, el Ministerio Fiscal debe intervenir en dicho procedimiento, puesto que su función es la de velar por el interés de los menores.

Puesto que en esta demanda se está debatiendo cuestiones de gran interés para ello, el Ministerio Fiscal debe intervenir a tenor del art 749.2 de la LEC.

IV. Postulación. — Según exige el art. 750.1 de la LEC las partes comparecerán asistidas de letrado y representadas por procurador.

También nos dice que en los casos de separación o divorcio, las partes si están de acuerdo, podrán ser representadas por una sola defensa y representación. Sin embargo, cuando algo no fuera aprobado por el tribunal, es decir, cuando los pactos propuestos no fuese aprobado por el juez, el Secretario Judicial podrá requerir a las partes en que un plazo de cinco días manifieste si desea continuar con la defensa y representación únicas o si prefieren tener su propia defensa y representación.

Así mismo, aunque el acuerdo por las partes sea homologado por el tribunal, para cuando se pida la ejecución de dicho acuerdo, el Secretario Judicial requerirá a la otra parte para que nombre a un abogado o representante.

V. Fondo del asunto.

Primero. — El art. 86 del CC dice que se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio a petición de uno solo de los cónyuges cuando concurren los requisitos y circunstancias exigidos en el art. 81 que, a su vez exige en los casos de tramitación contenciosa, que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio.

Como vemos, el art 86 nos dice que se puede presentar por uno de ellos pero se necesita el consentimiento del otro. Ya que no se cumple las excepciones que el art 81 CC da para que solo sea presentada antes de los 3 meses o por uno solo de ellos sin necesidad del consentimiento de la otra parte.

Segundo. — El último párrafo del art. 81.2 del CC, al que se remite el art. 86 del mismo texto legal, exige que a la demanda se acompañe propuesta fundada de las medidas que

hayan de regular los efectos derivados de la separación. El art. 91 del mismo texto legal confirma que el Juez fijará en las sentencias de divorcio las medidas relativas a los hijos, vivienda familiar, liquidación del régimen económico, cargas, garantías y cautelas necesarias.

Es decir, aunque las partes presenten sus peticiones, es el juez el encargado de confirmar o adoptar las medidas necesarias para estas cuestiones. Por tanto, debe de dar su aprobación o su no aceptación hacia estas.

Los siguientes preceptos del CC regulan de forma pormenorizada cada uno de los apartados anteriores: el art. 92 la guarda y custodia de los hijos, el 93 los alimentos para ellos, el 94 el régimen de visitas del cónyuge que no tenga consigo a los hijos, el 95 la disolución del régimen económico matrimonial, el 96 la atribución del uso de la vivienda familiar y el 97 la pensión compensatoria.

Tercero. —La sentencia que se dicte tendrá acceso al Registro Civil mediante actuación de oficio del Secretario judicial en aplicación del art. 755 de la LEC, y su inscripción deberá precisar, en aplicación del art. 263 del Reglamento del Registro Civil, su alcance y las determinaciones sobre patria potestad y cuidado de los hijos.

VI. Costas. —En aplicación del art. 394 de la LEC en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. (Las costas tendrá que pagarlas la parte que haya perdido el proceso en primer lugar, salvo que le tribunal disponga otra cosa por causa justificada).

Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.

2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.

3. Cuando, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa.

No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas.

Cuando el condenado en costas sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, éste únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal en los procesos en que intervenga como parte.

Por lo expuesto,

AL JUZGADO SUPlico:

Que tenga por presentado este escrito con los documentos que acompaño y copia de todo ello, admita a trámite la presente contestación de demanda y, previos los trámites oportunos, dicte en su día sentencia acordando la disolución del matrimonio por divorcio de Dña. María Teresa Mancha Cortes y D. Antonio Medina Caro, celebrado en la parroquia del Santo Ángel del Puerto de Santa María el día 7 de marzo de 1992, y aprobando las medidas que en el futuro regularán los efectos del divorcio que se indican a continuación.

Todo ello con expresa imposición de costas al demandante si se opusiera de forma temeraria a esta pretensión. Medidas que regularán los efectos de la separación y que deberán aprobarse con la sentencia, y que, además, se tendrán en cuenta con carácter provisional.

1. º PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA DE LOS HIJOS:

La guarda y custodia de los hijos menores se ejercerá exclusivamente por Doña María Teresa Mancha Cortés.

Las razones de esta pretensión son las siguientes:

1º.- Salvaguardar el interés superior de los menores, Luis y Elena, como bien jurídico fundamental puesto que por las circunstancias dadas pueden ver afectada negativamente la formación íntegra de su personalidad.

2º.- Procurar un entorno óptimo y estable para asegurar una adecuada respuesta de Luis frente al tratamiento médico, ya que nuestra representada posee el título de Licenciatura en Medicina, con especialización en psiquiatría.

3º.- Dada la enfermedad de Luis, mutismo selectivo, resulta necesaria la permanencia de éste con su madre puesto que se trata de una de las pocas personas con las que interactúa y se relaciona, además de con su profesora y su hermano mayor, como se puede observar en el documento adjunto número 3.

Dadas estas circunstancias, y por todos estos motivos, se pide que Doña María Teresa Mancha Cortés, tenga la guarda y custodia de los hijos, siendo la autoridad familiar exclusiva para nuestra representada.

Otrosí digo, en el caso de que este Tribunal no concediese la guarda y custodia de los hijos menores a Doña María Teresa Mancha Cortés, y la otorgase a Don Antonio Medina Caro, se le concederá una pensión alimenticia a los hijos menores, Luis y Elena, de 150 € por cada uno.

2. º RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN CON LOS HIJOS MENORES:

Se establecerá un régimen abierto de comunicación con los hijos menores. D. Antonio Medina Caro podrá recoger a sus hijos los fines de semana alternos desde las 12 horas del sábado hasta las 21 horas del domingo, cuando deberá reintegrarlos al domicilio materno, respetando siempre que no perjudique sus actividades escolares o de aprendizaje extraescolar.

Además, podrá recogerlos lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 21 horas.

En vacaciones, se dividirán a partes iguales entre ambos progenitores usando como referencia las vacaciones escolares (periodo estival, Semana Santa y Navidades). El período estival se divide en dos partes, siendo la primera los diez últimos días de Junio más el mes de Julio; y siendo la segunda parte el mes de Agosto y los diez primeros días de Septiembre.

Las vacaciones de Navidad serán divididas en dos partes también, quedando la primera parte desde el 22 hasta el 30 de Diciembre. La segunda parte será desde el 31 de Diciembre hasta el 7 de Enero.

Las vacaciones de Semana Santa quedarán divididas en dos períodos de igual duración.

3. º USO DEL DOMICILIO Y AJUAR CONYUGAL:

El uso del domicilio de Jerez de la Frontera y ajuar conyugal quedarán atribuidos a Doña María Teresa Mancha Cortés puesto que dicha vivienda es propiedad de los padres de nuestra representada, no tratándose siquiera de un bien privativo de la misma, sino de sus padres. Asimismo, convivirán en ella los hijos bajo la patria potestad de nuestra defendida.

Si bien, el uso de la vivienda de El Puerto de Santa María quedará atribuido a Don Antonio Medina Caro por un período limitado máximo de dos años, siempre y cuando no encuentre empleo situación ante la cual habrá de abandonar la vivienda.

El contrato de arrendamiento de dicha vivienda quedará rescindido, siendo esta rescisión posible si se anuncia con 15 días de antelación, quedando temporalmente atribuido el uso y disfrute de la vivienda de Jerez de la frontera, de manera temporal a Don Antonio, hasta que la vivienda de El Puerto de Santa María quede vacía. Al momento en que Don Antonio abandone el domicilio de Jerez de la Frontera, Doña María Teresa regresará al mismo.

Además, hasta que Don Antonio encuentre empleo, Doña María Teresa se encargará de los 800 € de hipoteca de la vivienda de El Puerto. En el momento en que Don Antonio encuentre trabajo, la vivienda de El Puerto de Santa María será vendida y se procederá a repartir al 50% entre ambos la cantidad recibida, o bien, cuando concurra dicha circunstancia, se le ofrecerá a Don Antonio la venta de su parte de la vivienda en favor de Doña María Teresa.

4. º PENSIÓN COMPENSATORIA:

Le será otorgada a Don Antonio Medina Caro una pensión compensatoria provisional de 200 € mensuales por un período máximo de dos años, o bien hasta que encuentre empleo estable.

5. º CARGAS Y DERECHOS DEL MATRIMONIO:

En estos momentos los cónyuges son titulares de los siguientes derechos: régimen económico de dos coches, una vivienda, y una carga hipotecaria. Esta parte interesa que, hasta que se produzca la definitiva liquidación del régimen económico matrimonial, se acuerde que la administración de D. Antonio se entregue a Dña. María Teresa.

D. Antonio y Dña. Mª Teresa tienen contraídas las siguientes cargas: un derecho de hipoteca, de la que se hará cargo Dña. Mª Teresa hasta que D. Antonio obtenga remuneración por algún trabajo y pueda sufragar el pago de la parte que le corresponda (50%). La cantidad a satisfacer mensualmente será de 800 euros.

6. º La sentencia producirá la DISOLUCIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL.

Por tanto, esta disolución producirá las siguientes consecuencias:

1º El vehículo Volkswagen Golf, quedará en propiedad y uso de D. Antonio Medina Caro.

2º- El vehículo Nissan XTrail, quedará en propiedad y uso de Doña María Teresa Mancha Cortés, puesto que se adapta mejor a las necesidades familiares a las que tiene que hacer frente.

3º- En cuanto a la vivienda arrendada, se procederá a la rescisión del contrato de arrendamiento actual, procediendo a ser ocupada temporalmente por Don Antonio por

un período máximo de dos años o hasta que encuentre trabajo. Ocurrido ello, bien se liquidará dicha vivienda, bien se le ofertará a Don Antonio la venta de su parte en favor de Doña María Teresa.

4º- El perro de raza labrador quedará en propiedad de Doña María Teresa, puesto que resulta beneficioso para la enfermedad de Luis.

Es justicia que pido en Jerez de la Frontera a veinte de noviembre de dos mil trece.